

El cumplimiento de las medidas económicas,

Así lo entienden los representantes del Gobierno y los diversos partidos políticos en el documento pactado en la Moncloa

Como ampliación al largo resumen que publicábamos ayer sobre las medidas económicas pactadas en la Moncloa entre los representantes del Gobierno y de los partidos políticos, medidas que, por otra parte, ha ido adelantando YA en el transcurso de la última semana, ofrecemos a continuación el texto íntegro del documento que será firmado el próximo martes.

La economía española atraviesa en estos momentos por una grave situación, caracterizada por tres desequilibrios fundamentales:

- Una persistente y aguda tasa de inflación.
- Un desarrollo insatisfactorio de la producción, con una caída importante de las inversiones, lo que ha generado unas cifras de paro elevadas, con repartos geográficos, por edades, por sexos y por ramas de actividad muy desiguales y ha agudizado los problemas que la misma plantea.
- Un fuerte desequilibrio en los intercambios con el extranjero. Estos desequilibrios de la eco-

nomía española se producen en un contexto económico internacional en el que todavía no han aparecido signos duraderos de recuperación económica.

Los representantes del Gobierno y de los diversos partidos con representación parlamentaria manifiestan su unánime preocupación ante esta situación y su deseo de afrontar y resolver constructivamente esos problemas en un clima de cooperación responsable que contribuya a la consolidación de la democracia. Para ello convienen en la necesidad de llevar a cabo dos grupos de acciones: las dirigidas a equilibrar la economía con actuaciones a corto plazo y las encaminadas a la realización de importantes reformas que encaucen la economía y la sociedad española hacia un futuro de libertad y progreso. Estas medidas y acciones se concretan en los siguientes ámbitos y contenidos:

Desempleo a todos los parados, agilizando el reconocimiento y pago de sus prestaciones.

POLITICA MONETARIA

La política monetaria contenida en el programa económico obedecerá a los siguientes principios:

- Se moderarán los ritmos de avance de las magnitudes monetarias para contribuir a una desaceleración progresiva del proceso inflacionista. Con este propósito se mantendrá durante 1978 una senda de crecimiento monetario cuyo punto medio se aproximará al 17 por 100 de aumento anual.
- El recurso del Tesoro al Banco de España en 1978 no podrá exceder de 14.000 millones de pesetas.
- Se limitará el nivel de las nuevas dotaciones al crédito oficial a 100.000 millones de pesetas durante 1978, de los cuales el Tesoro aportará 40.000 millones de pesetas, además del producto de la emisión de cédulas para inversiones. Esta financiación del crédito oficial atenderá preferentemente a la expansión de las actividades de la exportación, la agricultura, la construcción de viviendas y la pesca. El crédito oficial reforzará, asimismo, la atención a la pequeña y mediana empresa.

La actuación de las Cajas de Ahorros pondrá una especial atención a la financiación de la pequeña y mediana empresa a través de créditos comerciales. Los coeficientes de inversión de estas entidades atenderán también a la financiación de las corporaciones locales de su ámbito geográfico.

Se establecerán mecanismos transitorios que garanticen una adecuada distribución del crédito bancario privado entre empresas grandes y empresas medianas y pequeñas, al objeto de que el mismo en este ámbito se distribuya con equidad.

Se propondrá la creación de una sección de la Comisión Parlamentaria de Economía para el control de la política monetaria y de las instituciones financieras públicas y privadas.

La norma salarial indicada podrá revisarse a partir del 30 de junio de 1978 si el crecimiento de los precios al consumo en junio del referido año supera—respecto a diciembre de 1977—el 11,5 por 100, descontados los posibles aumentos por variaciones en el tipo de cambio, alteraciones en los precios internacionales de la energía y efectos de circunstancias excepcionales agrícolas y siempre que la tasa de inflación en 1977 sea aproximadamente del 30 por 100 (calculado sobre el índice de precios de diciembre del año anterior). Si esta tasa de aumento anual prevista para 1977 fuese distinta de la indicada, se revisará el tope de crecimiento de precios establecido como límite en el primer semestre de 1978.

Se recomienda que la distribución del incremento indicado de la masa salarial en cada empresa se efectúe de modo que la mitad, al menos, del referido incremento se distribuya linealmente entre los trabajadores de la misma.

Se adoptarán criterios de mejora de la información periódica sobre resultados de la empresa

y su difusión responsable a las fuerzas sociales que en la misma participan.

EMPLEO

Se adoptarán las medidas paralelas que aseguren una prestación eficaz y rigurosa del seguro de desempleo y un tratamiento prioritario de las modalidades de creación de puestos de trabajo, atendiendo especialmente al empleo juvenil, contratación temporal de los acogidos al subsidio de paro, sin pérdida de sus derechos, y a las áreas geográficas de mayor índice de desempleo. Para los casos de contratación temporal de acogidos al subsidio de desempleo a partir del día 1 de noviembre de 1977, el Estado—con cargo a los recursos de la Seguridad Social—satisfará el 50 por 100 de las cotizaciones que se devenguen.

Al objeto de fomentar el empleo juvenil se autoriza, dentro de un programa experimental que se concretará, la contratación temporal por un plazo máximo de dos años para los empleos derivados de los nuevos puestos de trabajo que se creen a partir del día 1 de noviembre de 1977, siempre que los mismos se cubran con personas que desempeñen por vez primera un trabajo. Para estos empleos, el Estado—con cargo a los recursos de la Seguridad Social—satisfará el 50 por 100 de las cotizaciones que se devenguen.

SANEAMIENTO ECONOMICO

- Los gastos consuntivos del Estado y Seguridad Social no podrán crecer más de un 21,4 por 100 en 1978
- El gasto público se orientará hacia el mantenimiento de la inversión
- El déficit del Estado será como máximo de 73.000 millones de pesetas en 1978
- Las cuotas de la Seguridad Social no podrán aumentar más del 18 por 100 en dicho año

Las medidas de saneamiento económico se articulan en el ámbito de la política presupuestaria, en el de la política monetaria, en el de la política de precios y rentas y, finalmente, en el de la política de cambios. En consecuencia, el Gobierno responderá a los siguientes principios y directrices:

PRESUPUESTOS DEL ESTADO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

La política presupuestaria del Estado y de la Seguridad Social durante el periodo de vigencia del programa económico obedecerá a las siguientes directrices fundamentales:

● Limitación y ejemplaridad de los gastos consuntivos del Estado y de la Seguridad Social. Durante 1978 tales gastos consuntivos no podrán crecer en más de un 21,4 por 100, tasa de crecimiento previsto del producto interior bruto en términos monetarios. Por otra parte, se revisarán todos aquellos gastos estatales cuya existencia no se justifique de modo estricto, en línea con el esfuerzo general que se solicita de la comunidad.

● Durante 1978 se orientarán preferentemente los gastos públicos hacia el mantenimiento de la ocupación. A este respecto se incrementarán los gastos estatales de inversión en un 30 por 100. Además el Estado contribuirá con 60.000 millones de pesetas al seguro de desempleo y transferirá otros 40.000 millones a la Seguridad Social para compensar la reducción que se proyecta de sus cuotas.

● La emisión de deuda pública durante 1978—que se efectuará en condiciones de mercado y por un importe de 40.000 millones de pesetas—se destinará específicamente a la financiación de un plan de construcciones escolares públicas.

● El déficit total del Estado será, como máximo, de 73.000 millones de pesetas en 1978, lo que permitirá evitar una caída excesiva de la demanda interna.

● Los ingresos impositivos aumentarán su progresividad en 1978 debido a la aplicación de la ley de Medidas Urgentes de Reforma Fiscal.

● Se moderarán los incrementos de los costes de trabajo mediante un menor crecimiento de las cuotas de la Seguridad Social, las cuales no podrán aumentar durante 1978 en más de un 18 por 100 respecto a 1977. La revisión del sistema de cotizaciones se efectuará con arreglo a criterios de progresividad y procurando que la participación del Estado en la financiación de la Seguridad Social pase de menos de un 8,5 por 100 en 1977 a un 8,2 en 1978 y tienda hasta un 20 por 100 del total de la misma en 1983.

● Contando con las transferencias recibidas del Estado, las

cuentas de la Seguridad Social habrán de equilibrarse en 1978 sin recurrir a otros medios extraordinarios de financiación.

● El incremento de las pensiones de la Seguridad Social se mantendrá limitado a criterios de progresividad en su distribución y, en consecuencia, los aumentos previstos en las mismas se destinarán preferentemente a la elevación de las pensiones más reducidas.

● Se extenderá progresivamente la cobertura del Seguro de

POLITICA DE PRECIOS

- Mantenimiento transitorio de un sistema de precios controlados de productos estratégicos
- Con independencia del actual índice de precios de consumo, se establecerá otro que recoja la evolución de los precios de determinados productos de consumo más frecuente para las clases de renta más baja
- Revisión de la estructura de los organismos de control de precios, con participación de empresarios, consumidores y trabajadores

Las actuaciones del programa económico se orientarán en el campo de los precios hacia los siguientes ámbitos:

● Mantenimiento transitorio de un sistema de precios controlados que afectará a productos estratégicos respecto del coste de la vida o a los precios que se forman bajo condiciones monopolísticas.

● Con independencia del mantenimiento del actual índice de precios de consumo podrá establecerse un indicador que recoja la evolución de los precios de determinados productos de consumo más frecuentes por las clases de renta más baja. En la elaboración del mismo participarán las distintas organizaciones empresariales y de consumidores, así como los trabajadores, fundamentalmente a través de los sindicatos.

● Se revisará la estructura de los organismos de control de precios y en sus actuaciones participarán con su asesoramiento las organizaciones empresariales y de consumidores, así como los trabajadores, fundamentalmente a través de los sindicatos.

POLITICA DE RENTAS

Por lo que respecta a la política de rentas, el programa obedecerá a los siguientes criterios:

● Crecimiento de la masa salarial bruta en cada empresa pública o privada—incluidas las cargas fiscales y de la Seguridad Social que procedan—hasta un 20

por 100 durante 1978, de forma que, computando los aumentos por antigüedad y ascensos, se llegue a un incremento total del 22 por 100, con un tratamiento favorable de los salarios más bajos. Cuando proceda—y por el periodo que reste hasta finales de 1977—esta norma se aplicará, asimismo, de modo que el incremento de la masa salarial no exceda a la equivalente al 25 por 100 en promedio respecto a la del año anterior y siempre que el crecimiento del índice de precios al consumo—también en promedio respecto al año anterior—no exceda tampoco del equivalente al 25 por 100. Si el crecimiento del índice de precios en promedio excediese en más de un punto de la referida tasa, se realizará el oportuno ajuste con objeto de mantener el poder adquisitivo de los salarios.

● Para garantizar el cumplimiento de esta norma se retirarán las ayudas crediticias y fiscales de toda índole a las empresas que no la respeten. Por otra parte se autorizará, en su caso, la reducción de la plantilla hasta en un 5 por 100 de sus efectivos en aquellas empresas en que se superen los niveles salariales antes indicados y siempre que ello sea consecuencia de las demandas sindicales. El Gobierno podrá establecer controles semestrales al respecto y, en todo caso, se evitará una aplicación discriminatoria de esta medida por razones políticas o sindicales.

POLITICA FISCAL

- El impuesto sobre la renta será global, personal y progresivo, sustituyendo a los actuales impuestos
- La reforma del impuesto sobre sociedades evitará las exenciones y tratamientos de privilegio
- La imposición indirecta gravará el consumo y la transmisión de bienes
- Creación de otro impuesto sobre el valor añadido

Las medidas de reforma fiscal se sustituirán a las Cortes dentro de los plazos anunciados por el Gobierno, y tanto en lo que se refiere a la imposición sobre personas físicas como en lo relativo a los restantes impuestos y en lo que concierne a la estructura recaudatoria de los ingresos tributarios responderán a las siguientes directrices:

IMPOSICION SOBRE PERSONAS FISICAS

● El impuesto sobre la renta de las personas físicas tendrá carácter global, personal y progresivo, sustituyendo a los actuales impuestos reales o de producto que serán absorbidos por el mismo.

La tarifa del impuesto sobre la renta tendrá carácter progresivo, y los tipos efectivos que recaigan sobre las rentas modestas serán inferiores a los actualmente vigentes. Para alcanzar una aplicación general y del impuesto, los tipos efectivos de gravamen serán, en todo caso, moderados, como respuesta paralela a la amplitud de la base y a la inexorable exigencia del cumplimiento del tributo.

● El impuesto definitivo sobre el patrimonio se armonizará en su estructura al nuevo impuesto sobre la renta, se aplicará sobre bases reales y se ajustará, en lo relativo a tipos de gravamen, a las líneas generales del texto del impuesto extraordinario aprobado en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso.

● El impuesto sobre sucesiones y donaciones se estructurará en un texto más simple y quedará coordinado con el impuesto sobre patrimonio, remitiéndose al texto regulador del mismo en lo referente a las valoraciones.

RESTANTES IMPUESTOS

Se presentarán a las Cortes un proyecto de ley de impuesto sobre las sociedades y un proyecto de reforma de la imposición indirecta, conforme a los siguientes principios:

● La reforma del impuesto sobre sociedades modernizará la vigente imposición sobre los beneficios de las entidades jurídicas en un texto que evitará todo tipo de exenciones y tratamientos de privilegio que no sean necesarios para incentivar la inversión creadora de puestos de trabajo.

● La reforma de imposición indirecta llevará consigo una racionalización de la estructura tributaria que grava el consumo y las transmisiones de bienes, al objeto de alinear el sistema fiscal español a los vigentes en los países europeos que forman parte de las comunidades, contien-

do, además, un impuesto sobre el valor añadido, cuya efectividad quedará condicionada a una situación económica favorable para la misma, procurándose que no genere sensibles elevaciones en los precios.

ESTRUCTURA RECAUDATORIA

En cuanto a la estructura recaudatoria que se derive de la reforma fiscal, los criterios orientadores de la misma serán los siguientes:

● Las recaudaciones por imposición directa y por imposición indirecta, en el Presupuesto del Estado para 1978, resultarán paritarias.

● Asimismo, el avance de la importancia relativa de la imposición progresiva en la financiación del gasto público se mantendrá como tendencia para los ejercicios futuros. El Ministerio de Hacienda comunicará la nueva estructura tributaria cuantificada una vez que sea aprobada la reforma en su totalidad por las Cortes.

● Para el ejercicio de 1978 la relación de ingresos tributarios respecto al producto interior bruto será de aproximadamente, un punto de porcentaje superior a la de 1977.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTROL DEL GASTO PUBLICO

El perfeccionamiento del control del gasto público responderá a los siguientes principios y directrices:

● La Administración se compromete a establecer el control de la asignación de recursos a través de presupuestos de programas a partir de los Presupuestos para 1979, comenzando por los gastos de Sanidad y Seguridad Social, obras públicas y, en cuanto técnicamente sea posible, educación.

● Del mismo modo se aplicarán las normas de la ley General Presupuestaria, en relación con la especificación territorial de la asignación de recursos.

● La Administración se compromete a desarrollar, en el plazo de seis meses, las normas establecidas en la ley General Presupuestaria en cuanto a control de legalidad, control de auditoría y control de eficacia.

● Sin perjuicio de la futura estructuración constitucional del Tribunal de Cuentas, el ámbito de su competencia y el sistema de designación de sus miembros se regulará de tal manera que quede asegurada la independencia en el desempeño de

punto de partida para superar la crisis

ciones y la eficacia del control a su cargo.

● Se considera conveniente la creación de Subcomisiones, dentro de las correspondientes Comisiones parlamentarias, que garanticen un más adecuado control parlamentario del gasto público. Especialmente se considera conveniente la creación de Subcomisiones sobre "Subvenciones y transferencias a empresas y organismos públicos", "Gastos fiscales" y "Retribuciones de personal del sector público".

POLITICA EDUCATIVA

La política educativa se orientará conforme a los siguientes ejes y criterios:

● Democratización del sistema educativo, buscando la participación de todos los sectores y definiendo un estatuto de los centros educativos y del profesorado. Deberán constituir objetivos prioritarios de esta política la mejora de la calidad en la enseñanza y la homogeneización técnica de la misma entre los centros estatales y no estatales.

● Gratuidad progresiva de la enseñanza. Para ello, se adoptarán las siguientes medidas:

a) En el ámbito de los centros estatales.

● Se acometerá la expansión efectiva de la gratuidad de la enseñanza mediante la construcción, equipamiento y atención a los gastos de funcionamiento y de profesorado de los puestos escolares que se incluyan en el plan extraordinario de escolarización de 40.000 millones de pesetas. A tales efectos se crearán 400.000 plazas de Educación General Básica, 200.000 nuevas plazas en educación preescolar y 100.000 nuevas plazas de bachillerato unificado polivalente durante 1978.

POLITICA DE RENTAS

- Tope de crecimiento a la masa salarial bruta de un 20 por 100 durante 1978
- Posible revisión salarial el 30 de junio de 1978 si los precios de consumo en los seis primeros meses del año alcanzan el 11,5 por 100
- Reducción de plantillas hasta el 5 por 100 para las empresas con mayor aumento salarial, según las demandas sindicales

El Ministerio de Educación y Ciencia informará trimestralmente a la Comisión Parlamentaria de Educación sobre los niveles de cumplimiento alcanzados en este plan.

● Se estudiarán, de cara al Presupuesto de 1979, las medidas que tiendan a la adecuada retribución del profesorado: se considerará la gratuidad total de servicios de comedores y transporte en los niveles de enseñanza obligatoria, cuando se impongan como necesarios para los alumnos de concentraciones escolares, y se examinará el posible abaratamiento de los libros de texto en niveles educativos obligatorios.

● Se implantará la participación de los padres de alumnos y del profesorado en el control del funcionamiento y condiciones de estos centros.

b) Respecto a los centros no estatales se procederá a una revisión profunda del sistema de financiación con la definición, si se considera conveniente, de un estatuto de los centros subvencionados en que se prevea la participación de padres de alumnos y profesorado por la que se atienda a la función, necesidades y condiciones de tales centros y en el que se asegure el control de la aplicación de fondos públicos a los mismos.

● La política educativa se completará, además, con las siguientes actuaciones:

a) Se incorporarán las distintas lenguas y contenidos culturales en sus respectivos ámbitos territoriales, para todos los niveles educativos obligatorios. En coherencia con estas medidas, se facilitará al profesorado, en su caso, el oportuno reciclaje.

b) En la medida en que se vayan instaurando los diferentes regímenes y estatutos autonómicos, se establecerá la pertinente colaboración entre el Gobierno y las instituciones autonómicas para la realización de estos planes.

c) La política de inversiones habrá de complementarse con una eficaz acción en materia de obtención de suelo, para lo que se precisa una especialísima colaboración de los organismos de Obras Públicas y Urbanismo, así

Tres desequilibrios fundamentales de la economía: persistente y aguda tasa de inflación, desarrollo insatisfactorio de la producción con caída de la inversión, lo que genera paro, y fuerte desequilibrio en los intercambios con el extranjero

como de las Corporaciones Locales, y las medidas legislativas necesarias que permitan la urgente disponibilidad del suelo.

d) Asimismo se considera necesario adoptar las medidas para reducir los actuales plazos en las construcciones y agilizar al máximo la actuación administrativa.

POLITICA DE URBANISMO, SUELO Y VIVIENDA

Los criterios y directrices a los que habrá de responder la política de urbanismo, suelo y vivienda serán los siguientes:

La política de suelo y urbanismo propuesta se basa en tres principios: primero, en que la actuación política debe reflejar el deseo social de ocupación y uso del suelo urbano; segundo, en que el plusvalor sobre el suelo urbano es fundamentalmente de la colectividad, y, finalmente, que el sector público debe asumir un papel principal en lo referente a garantizar la entrada en uso del suelo urbano.

Conforme a tales principios generales se proponen las siguientes medidas concretas a corto plazo en lo referente a urbanismo y suelo:

● Se instrumentarán medidas para poner urgentemente en uso suelo ya calificado urbanizado o

VIVIENDA

En lo referente a vivienda, la actuación del Gobierno se orientará en una doble vertiente: de una parte, hacia el establecimiento de mecanismos que garanticen la financiación de la vivienda dentro de plazos adecuados, y, de otra, hacia el aumento de la construcción de viviendas para los sectores más necesitados de la población.

En consecuencia, la política de vivienda se ajustará a los siguientes principios:

● Promoción de las adquisiciones de suelo urbano o urbanizable por las corporaciones locales y otras instituciones públicas para su cesión temporal con des-

tino a la construcción de viviendas destinadas a las clases de rentas más bajas. A tales efectos se facilitará la creación de empresas mixtas con participación mayoritaria municipal.

● Prioridad absoluta a la construcción de viviendas con destino a la población de menor renta durante 1978 y 1979 y favoreciendo el disfrute de parte de las mismas en régimen de alquiler.

● Instrumentación de los mecanismos democráticos pertinentes para adjudicación de viviendas de promoción directa y el control general de éstos y de las viviendas sociales, así como de sus acotaciones y equipamientos urbanísticos.

● Adopción de medidas efica-

ces para la utilización de viviendas desocupadas.

● Investigación urgente sobre la ocupación actual de las viviendas promovidas directamente por el Estado con el fin de acabar con las distorsiones existentes en este sector.

● Se promoverán en suelo público, actual o adquirido, operaciones de construcción directa o en régimen de concesión a iniciativa privada, favoreciendo el régimen de cooperativas y concertando las condiciones finales y los plazos de ejecución. Asimismo se promoverán conciertos en el sector privado para la promoción urgente de viviendas y equipamientos en las mismas condiciones.

● Iniciación de las gestiones para descentralizar de inmediato la aplicación de la política de vivienda y, muy especialmente, de viviendas sociales y de construcción directa.

● Realización de los estudios pertinentes para conocer el mercado de la vivienda de alquiler en España de tal forma que, a partir de los resultados obtenidos, se posibilite una actualización

(Continúa en página sigte.)

SEGURIDAD SOCIAL: criterios de participación de la

(Viene de la pág. anterior)

ción de la ley de Arrendamientos Urbanos u otras medidas pertinentes.

● Instrumentación de apoyo financiero a través del crédito oficial—y dentro de sus posibilidades—para la creación de empresas mixtas con participación mayoritaria municipal destinadas a la adquisición de suelo y promoción de viviendas sociales. Se establecerá, además, un marco institucional que promueva la formación y desarrollo de entes promotores colectivos de viviendas, tales como Patronatos Municipales, Cooperativas de Usuarios y otros similares.

● Remoción de los obstáculos jurídicos y administrativos que se oponen a la creación de un mercado amplio de hipotecas, revisando para ello el impuesto que grava las transmisiones patrimoniales en el ámbito de los bienes

inmuebles y proponiendo la regulación de fondos de inversión inmobiliaria que tomen como activo las hipotecas sobre inmuebles.

REFORMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Como principio general, la actuación en el terreno de la Seguridad Social se ordenará con arreglo a criterios de creciente participación de la sociedad en las decisiones y en el funcionamiento de la misma. A tales efectos se adoptarán las siguientes medidas:

● Se presentará al Congreso un proyecto de ley que contemple la reestructuración de las actuales entidades gestoras de la Seguridad Social de acuerdo con principios de simplificación, racionalización, ahorro de coste, eficacia social y descentralización. Asimismo se pasarán a la Admi-

nistración del Estado el servicio de empleo y acción formativa, promoción profesional obrera, Instituto Español de Emigración y Servicio de Universidades Laborales, así como el Servicio de Seguridad e Higiene, excepto en las funciones que éste realice de medicina preventiva laboral.

● Los presupuestos, los gastos y la gestión de la Seguridad Social se someterán al control parlamentario.

● El control y vigilancia de la gestión de la Seguridad Social corresponderá a la Intervención General del Estado, sin perjuicio de que se adopten las medidas necesarias para garantizar a los asegurados y beneficiarios la calidad y eficacia de los servicios y prestaciones.

● El control y vigilancia de la gestión de las entidades gestoras de la Seguridad Social se efectuará desde el nivel local al estatal por órganos en los que figuren, por partes iguales, representantes de los trabajadores, de los empresarios y de la Administración Pública. La participación de

● Se autorizará el despacho directo de productos farmacéuticos básicos en el recinto de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social a los beneficiarios de la misma.

AYUDA FAMILIAR

Se realizará un estudio sobre el actual sistema de ayuda familiar que contemple su efectiva reestructuración con vistas a obtener una mayor eficacia redistributiva.

SEGURO DE DESEMPEÑO

● El Estado deberá hacerse cargo progresivamente de la financiación del Seguro de Desempleo y, en la medida en que ello suceda, deberán traspasarse las competencias en esta materia al Departamento ministerial responsable de la política de empleo.

● En materia de desempleo se controlarán los censos, la marcha de las oficinas de colocación y, en general, los distintos aspectos de esta prestación en orden a su eficacia en todos los ámbitos, par-

prestación del subsidio de desempleo para ciertas categorías de trabajadores sometidos a circunstancias excepcionalmente difíciles.

● En la medida que lo permitan las posibilidades económicas y financieras de la Seguridad Social y de las aportaciones del Estado, se revisará la cuantía de las prestaciones por desempleo, de forma que—unidas las de la Seguridad Social a las del Fondo Nacional de Protección al Trabajo—no sean inferiores al salario mínimo interprofesional; asimismo se incrementarán las subvenciones para mitigar el paro de las personas encuadradas en el Régimen Especial Agrario y de los Trabajadores del Mar. Además, se establecerá un tope máximo a la prestación por desempleo al objeto de conseguir una mayor progresividad del sistema.

PENSIONES

Para el año 1978, y con efectos a partir del 1 de enero, se incrementará la masa global de las pensiones en un 30 por 100 y se distribuirá su cuantía de forma que incida progresivamente en las más reducidas.

SEGURIDAD SOCIAL

AGRARIA

El Régimen de la Seguridad Social Agraria será equiparado al Régimen General de acuerdo con el ritmo que permita la política económica, revisándose los sistemas de cotización, los criterios de prestaciones y los de fijación de la cuantía de las cuotas, tanto de empresarios como de trabajadores.

SALUD Y ASISTENCIA SANITARIA

Se elaborará un catálogo de enfermedades profesionales y se actualizarán las normas de medicina preventiva. Asimismo, se recomienda la creación de un Servicio de Orientación Familiar y la inclusión de la psiquiatría dentro de las prestaciones de la Seguridad Social, todo ello dentro de las posibilidades actuales del marco financiero general de la misma.

POLITICA DE SEGURIDAD SOCIAL

- Proyecto de ley para reestructurar las actuales entidades gestoras de la Seguridad Social
- Representantes de los trabajadores, empresarios y Administración accederán al control y vigilancia de las entidades gestoras de la Seguridad Social
- La cotización de la Seguridad Social se realizará según los niveles de renta y salario real del cotizante

Los trabajadores en dichos órganos se instrumentará fundamentalmente a través de los distintos sindicatos y en función de los resultados obtenidos en las elecciones sindicales; esta participación será regulada con carácter urgente mediante una norma que entrará en vigor en el plazo máximo de cuatro meses a contar desde la fecha de celebración de dichas elecciones. La mencionada norma deberá asimismo contemplar la representación de los empresarios a través principalmente, de las organizaciones empresariales.

● En los servicios sociales se establecerá una representación democrática en los distintos niveles territoriales, con participación de los beneficiarios y de la Administración Pública.

INSPECCION

Se establecerán las medidas necesarias para imprimir la mayor eficacia a la recaudación y control de la Seguridad Social, actualizándose los cometidos de inspección financiera y de gestión.

FINANCIACION

● Se establecerá un sistema de cotización con arreglo a criterios de progresividad, de eficacia social y de redistribución. A tales efectos las cotizaciones se establecerán en función de los niveles de renta de los cotizantes y se referirán a los salarios reales; asimismo se introducirán fórmulas de estratificación o normalización de las cotizaciones por módulos retributivos en los que se agruparán los distintos niveles de ingresos reales a efectos de cotización.

● La aportación del Estado a la Seguridad Social aumentará al ritmo que permita la marcha general de los ingresos del Estado, pasando de un 3,5 por 100 en 1977 a un 8,2 por 100 en 1978 y hasta alcanzar un 20 por 100 de la financiación para el ejercicio de 1983.

PRESTACIONES

● En lo que se refiere a las prestaciones farmacéuticas se adoptarán medidas que garanticen la utilidad de las nuevas especialidades y se controlarán los precios de importación de materias fundamentales. Asimismo se elaborarán normas específicas sobre concertos de la Seguridad Social con laboratorios y farmacias y sobre autorización administrativa previa de la publicidad que no se limite a niveles científicos. Se realizará un estudio sobre la racionalización de la industria nacional farmacéutica, especialmente de la productora de primeras materias, procediéndose, si fuera conveniente, a la creación de una empresa nacional de productos intermedios químico-farmacéuticos.

● Con objeto de frenar el consumo innecesario de productos farmacéuticos se revisará la participación de los beneficiarios en el coste de estas prestaciones, excepto en lo que se refiere a medicamentos básicos y con exclusión, en todo caso, de los colectivos menos protegidos.

ticulamente en el local, a través de órganos de vigilancia y control, con la misma composición de fuerzas sociales ya especificada, los cuales podrán establecer subcomisiones especializadas al efecto; asimismo las oficinas de colocación harán públicas las listas de parados con objeto de facilitar su reincorporación al trabajo.

● Se ampliarán los plazos de

REFORMA DEL SISTEMA FINANCIERO

La reforma del sistema financiero responderá a los siguientes principios:

● Antes del 31 de marzo de 1978, el Gobierno remitirá a las Cortes un proyecto de ley para la nueva regulación de los órganos rectores del Banco de España y del crédito oficial.

● Se adecuarán las normas reguladoras del crédito oficial, de forma que las entidades oficiales de crédito se financien, al menos en su tercera parte, con fondos captados en el mercado; sus operaciones activas pueden ser similares a las de la Banca privada y tengan posibilidad de acceso a los créditos de regulación monetaria.

● Las Cajas de Ahorros prestarán atención prioritaria a la financiación de la pequeña y mediana empresa, a la del comprador para la adquisición de la vivienda propia, a la de los sectores agrícola y pesquero y a la de cuantas actividades estimulan la creación de empleo en el ámbito

territorial en el que operen. El Gobierno propondrá, en el plazo de un mes, las medidas oportunas en orden al cumplimiento de tales objetivos. Las autoridades financieras y la sección de Política Monetaria de la Comisión de Economía del Congreso vigilarán, en sus respectivos ámbitos de competencia, el funcionamiento de estas entidades y garantizarán la representación efectiva en sus órganos de gobierno de los impositores y, cuando proceda, de las entidades y corporaciones y de los propios gobiernos autonómicos de su ámbito territorial.

● Las Cajas Rurales pasarán a depender del Ministerio de Economía y serán controladas por el Banco de España en análogos términos que las Cajas de Ahorros y la Banca privada.

● Se revisarán las actuales normas sobre incompatibilidades bancarias y se limitará la posibilidad de concesión de créditos por las entidades bancarias a so-

sociedad en las decisiones y funcionamiento

ciudades anónimas en cuyo capital posea una especial participación alguno de los altos cargos de tales entidades bancarias.

- Dentro del mercado de capitales, se potenciarán las emisiones de títulos de renta fija, adecuándose sus tipos a los del mercado.

- Respecto al mercado de hipotecas, se eliminan las trabas le-

gales y administrativas que actualmente obstaculizan el desarrollo de mismo.

- Se revisará la función de los agentes mediadores en el mercado de capitales, en el sentido de liberalizar y ampliar la función mediadora.

- Se revisará la legislación vigente en materia de inversión colectiva.

POLITICA AGRICOLA

- Ley de Seguros Agrarios que proteja al agricultor de las consecuencias de las catástrofes
- Decreto adicional al de Cámaras Agrarias que asegure la democratización de estos órganos de consulta y colaboración
- Funcionamiento de las Cajas Rurales por principios cooperativos
- Ley de Reforma y Desarrollo Agrario
- Ley de Cooperativas y Entidades Asociativas Agrícolas

Las actuaciones en el terreno de la política agrícola se ordenarán con arreglo a los siguientes criterios:

ORDENACION DE CULTIVOS

- Se definirán los criterios de ordenación de cultivos antes del mes de julio de 1978. Tales criterios deberán tener en cuenta las diferentes agriculturas existentes en el país y, dentro de unos principios generales de coordinación, deberán tender hacia la eliminación de los desequilibrios agroalimentarios. El carácter de estos criterios será indicativo y contendrán una específica política ganadera y una política de grasas.

- En la elaboración de los criterios de ordenación de cultivos participarán las organizaciones y sindicatos profesionales, así como, en su caso, las instituciones de los regímenes autonómicos.

- En la elaboración de los criterios de ordenación de cultivos se tendrán en cuenta la demanda, tanto actual como potencial, del mercado interior y exterior y el aprovechamiento integral de los recursos naturales. Asimismo, se fijará como objetivo en esa elaboración el reducir el desequilibrio de la balanza comercial agraria en los próximos años.

LEY DE ARRENDAMIENTOS RUSTICOS

Antes del 30 de junio de 1978 se presentará un proyecto de ley de arrendamientos rústicos que incorporará a la actual normativa los siguientes criterios:

- Regulación del acceso a la propiedad de la tierra para los arrendatarios.

- Supresión progresiva de la posibilidad de fijar cánones arrendatarios en función de los frutos obtenidos. Se favorecerá, asimismo, la permanencia y continuidad en la relación arrendataria, estableciendo criterios equitativos para la revisión periódica de la renta.

- Examen profundo del régimen de aparcería, a fin de darle la solución más adecuada de acuerdo con las características de las distintas zonas geográficas o regionales.

- Reembolso de las mejoras realizadas por el arrendatario en los casos de venta o extinción forzosa del arrendamiento.

- Actuación fiscal sobre las tierras insuficientemente aprovechadas.

- Revisión de las normas legales sobre derecho de los arrendatarios en caso de expropiación forzosa o enajenación.

POLITICA DE PRECIOS

El Gobierno regulará conjuntamente los precios agrícolas, con antelación suficiente para orientar la campaña; para ello se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

- La política de precios agrícolas y la fijación conjunta de precios para la próxima campaña se elaborará con la participación de las distintas organizaciones y sindicatos agrarios, representativos de los intereses del sector.

- Se analizarán los niveles comparativos de renta del sector agrícola y de los demás sectores mediante la correspondiente investigación estadística y se procurará que las diferencias entre tales niveles no se incrementen en lo sucesivo. Además, se arbitrarán las medidas necesarias para que el agricultor sea el be-

neficiario directo de las subvenciones a los productos agrarios.

El tratamiento coherente y unitario del sector.

- c) Elaboración, antes del 30 de junio de 1978, de un amplio plan de reestructuración del sector pesquero, que contemple tanto las acciones de carácter interno referentes a las actividades pesqueras que se realicen dentro de las aguas jurisdiccionales como la defensa y potenciación de la pesca de altura y gran altura sometida a la jurisdicción de terceros países.

- En lo que se refiere a la política pesquera interna, los principales criterios de actuación serán los siguientes:

- a) Estructuración adecuada de los centros de investigación pesquera.

- b) Ordenación en función de

POLITICA DE COMERCIALIZACION

- Se elaborará, antes del 30 de junio de 1978, un programa de reforma y modernización de las estructuras comerciales, cuyas principales líneas de actuación serán las siguientes:

- a) Mejora de la comercialización en origen, con objeto de que los productores asuman una parte creciente del proceso de distribución. Para ello se fomentarán las cooperativas de comercialización agraria, se mejorará el funcionamiento de los mercados de origen y se facilitará la presencia de los productores en los mercados centrales, así como su relación directa con el escalón detallista y las cooperativas de consumo.

- b) Transparencia del escalón mayorista, buscando la desaparición de intermediarios innecesarios y aumentando el grado de competencia entre los que deban subsistir. Para ello se desarrollará una política de mercados centrales, en el doble sentido de mejora de su infraestructura y de revisión de las normas a que está sometido el funcionamiento y el acceso a los mismos. Al mismo tiempo se dará prioridad al desarrollo de canales alternativos, mediante centrales de distribución, de origen y de destino, que eviten el paso forzoso por los mercados centrales de todos aquellos productos que reúnan las condiciones sanitarias adecuadas.

los resultados de estos estudios de la pesca de litoral.

- c) Regionalización de la actividad pesquera y marisquera, con adecuada representación de las fuerzas sociales en los órganos que se creen.

- d) Establecimiento de una política comercial coherente con las peculiaridades de la producción pesquera.

- e) Consideración especial de los problemas sociales del sector.

- En relación con la política exterior pesquera, los criterios de actuación serán los siguientes:

- a) Defensa del derecho de acceso a los caladeros tradicionales y apertura de nuevas posibilidades para la flota.

- b) Potenciación de empresas pesqueras conjuntas.

- c) Modernización del escalón detallista mediante una serie de acciones que faciliten tanto el asentamiento y la financiación de la pequeña y mediana empresa comercial como los movimientos de asociación e integración entre comerciantes y detallistas. Asimismo se regulará la creación de grandes superficies comerciales.

- En el ámbito de la regulación

POLITICA ENERGETICA Y ESTATUTO

Respecto a la política energética y al estatuto de la empresa pública, la actuación del Gobierno se orientará conforme a los siguientes criterios:

POLITICA ENERGETICA

La crisis energética que afecta a todos los países industrializados reviste especiales caracteres de gravedad en el caso de España, debido a la confluencia de tres factores: en primer término, debido al consumo excesivo de energía en relación con el producto nacional bruto y la utilización poco racional de la energía primaria; en segundo lugar, por la gran escasez de recursos energéticos propios, lo que origina una dependencia desproporcionada del exterior, y, finalmente, por la incidencia de las importaciones energéticas en la balanza

y ordenación de los mercados se potenciarán los servicios de vigilancia y disciplina de los mismos, a fin de asegurar la competencia en precios, la lucha contra el fraude y el fomento de la calidad, a la vez que se avanzará en la normalización técnico-comercial de los productos en el mercado interior, como medio de conseguir una mayor fluidez de la actuación comercial y una mayor información de la administración y defensa de los derechos de los propios consumidores.

- Se revisará, antes del 31 de marzo de 1978, la normativa que rige el Instituto Nacional del Consumo, con el fin de dotarlo de un mayor grado de técnica y eficacia en sus funciones. Se reorganizarán los servicios de la Administración que se relacionen directamente con los intereses de los consumidores, potenciando la participación de éstos en aquellos organismos cuyas decisiones puedan afectarles directamente y preparando la promulgación de un estatuto del consumidor.

- Por último, se procederá a la transformación de la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes, con objeto de lograr una mayor libertad de mercado y reducir la intervención directa del Estado en los mismos.

de pagos. Es, pues, uno de los problemas básicos y más graves con los que se enfrenta la economía española, al igual que los demás países industriales, y que, por consiguiente, requiere que se inicie una urgente y firme política de acuerdo con los siguientes principios:

1. Supeditación de la política energética al logro de los objetivos prioritarios que el Gobierno se ha fijado en materia de política económica y muy especialmente de balanza de pagos.

2. Remisión a las Cortes, antes de fin de año, de un nuevo plan energético, compatible con la necesaria conservación del medio ambiente, que apunte a contener y—si ello fuera posible—a disminuir la intensidad y

(Continúa en página sigte.)

Pacto económico de la Moncloa

(Viene de la pág. anterior)

elasticidad del consumo energético mediante las siguientes medidas:

a) Una política coherente de conservación y ahorro energético basada, en primer término, en la utilización de un sistema de precios realistas que impida el continuado abaratamiento de la energía en términos reales y en relación al resto de los bienes y servicios disponibles, y, en segundo lugar, en la instrumentación de distintas medidas de ahorro energético, recurriendo incluso—si ello fuere necesario—a la contingencia de los consumos energéticos.

b) Una política de diversificación de fuentes energéticas y de países de procedencia de las mismas.

c) Una política de desarrollo acelerado de los recursos propios, dentro de criterios de racionalidad económica y social de las producciones nacionales de petróleo, de combustibles nucleares, de la energía hidroeléctrica y del carbón.

d) Una política de potenciación de las investigaciones y el desarrollo de las fuentes alternativas de energía, con especial referencia a la energía solar, estimulando la creación de una tecnología propia.

3. Para facilitar y consolidar las medidas previstas se procederá a una reordenación de los distintos sectores energéticos, potenciando al máximo el ejercicio de las potestades administrativas—y, en su caso, de los derechos derivados de la posición de accionista de la Administración Pública en las empresas de todos los subsectores—para conseguir la racionalización y coordinación del sector energético en aras a la

más perfecta y completa satisfacción de los intereses públicos. Por lo que respecta a cada uno de los sectores energéticos, se procederá, además, a la adopción de las siguientes medidas:

a) En el subsector de hidrocarburos se procurará la coordinación de las competencias administrativas y, en lo posible, la existencia de un organismo que agrupe todas las participaciones públicas en el subsector.

b) En el subsector eléctrico se procurará la optimización del sistema de explotación con las consiguientes compensaciones que el mismo conlleva, la planificación de las inversiones futuras y la optimización del sistema de transporte y distribución, garantizando la dirección de todo el proceso por los órganos competentes de la Administración Pública. Asimismo se procederá a la adopción de medidas que estimulen la concentración de empresas eléctricas y se prestará la necesaria atención a la electrificación rural.

c) En el subsector nuclear se garantizará que el procedimiento de localización de instalaciones nucleares—donde tendrán intervención las autoridades locales—persiga la ubicación más idónea de las mismas, estableciéndose un adecuado sistema de compensaciones. Por otra parte, se garantizarán las máximas seguridades en la explotación de las instalaciones nucleares, así como de los almacenes de residuos radiactivos. Por último, se potenciará la máxima utilización posible de tecnología nacional en el campo nuclear, controlando y coordinando la Administración tanto las importaciones de equipos nucleares como las transferencias de tecnología.

subcomisión específica dentro de la Comisión de Economía.

● **Control por la Administración.** El estatuto de la empresa pública regulará los siguientes extremos:

a) Su coordinación y racionalización de conjunto por un órgano de la Administración.

b) Su control financiero externo, de acuerdo con lo establecido en la ley presupuestaria.

c) Su control interno, que se efectuará por los distintos departamentos ministeriales competentes.

● **Régionalización de inversiones.** La inversión realizada a través de la empresa pública deberá coadyuvar al desarrollo de las regiones menos desarrolladas. En los planes de inversión de las empresas públicas se determinará con claridad suficiente el porcentaje de las mismas que se destine a las distintas áreas regionales.

● **Descentralización de actividades.** En espera de lo que en este sentido pueda derivarse de la nueva Constitución y del eventual establecimiento de gobiernos autónomos, se procurará conseguir desde ahora en este ámbito el máximo grado de descentralización, compatible en todo caso con las directrices que adopte la empresa pública a nivel general.

● **Participación de las fuerzas sociales.** Reconocimiento de la participación de los trabajadores en los órganos de gobierno de las empresas públicas, fundamentalmente a través de sus sindicatos y establecimiento de cauces de consulta a los consumidores o usuarios para la elaboración de las políticas de éstas cuando les afecten y para el control de la eficacia de sus actividades.

● **Régimen de incompatibilidades.** Establecimiento de un régimen de incompatibilidades para los miembros de los Consejos de Administración de las empresas públicas.

● **Adquisiciones y enajenaciones.** La adquisición y enajenación de empresas o de activos por parte del sector público se someterá a rigurosas formas de valoración que garanticen, en todo caso, su realización por el valor justo que corresponda.

● **Condiciones de actuación.** Las condiciones de actuación de las empresas públicas y privadas se equipararán de forma que en la gestión de ambos tipos de empresa no se den situaciones discriminatorias.

Los representantes del Gobierno y de los diversos partidos políticos con representación parlamentaria entienden que, si las acciones expuestas se cumplen, señalarán el punto de partida para la superación de la actual crisis económica.

ESTATUTO DE LA EMPRESA PÚBLICA

- Reconocimiento de la participación de los trabajadores en los órganos de gobierno
- Régimen de incompatibilidades para los miembros del Consejo de Administración
- Control parlamentario y de la Administración
- Regionalización de inversiones
- Descentralización de actividades

Antes del 30 de junio de 1978, el Gobierno remitirá un proyecto de ley a las Cortes relativo al estatuto de la empresa pública, sobre la base de los siguientes criterios:

● **Control parlamentario.** Dada la problemática de las empresas públicas, considera conveniente que el control parlamentario de las mismas se realice por una